

27ª REUNION — Continuación de la 14ª SESION ORDINARIA — SEPTIEMBRE 4 DE 1985

Presidencia de los señores diputados Juan Carlos Pugliese y Roberto Pascual Silva

Secretarios: doctor Carlos Alberto Bravo y señor Carlos Alberto Béjar

Prosecretarios: señores Hugo Belnicoff y Ramón Eladio Naveiro

DIPUTADOS PRESENTES:

ABDALA, Luis Oscar
ABDALA, Oscar Tupio
ACEVEDO de BIANCHI, Carmen Beatriz
AGUILAR, Ramón Rosa
ALAGIA, Ricardo Alberto
ALLEGRONE de FONTE, Norma
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALTAMIRANO, Amado Héctor Heriberto
ALVAREZ, Adrián Carlos
ALVAREZ, Roberto Pedro
ARABOLAZA, Marcelo Miguel
ARRECHEA, Ramón Rosaura
ARSON, Héctor Roberto
ASENSIO, Luis Asterio
AUSTERLITZ, Federico
AZCONA, Vicente Manuel
BAGLINI, Raúl Eduardo
BALESTRA, Ricardo Ramón
BARBARO, Julio
BELARRINAGA, Juan Bautista
BERNASCONI, Tulio Marón
BERRI, Ricardo Alejandro
BIANCHI, Carlos Humberto
BIELICKI, José
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, José Celestino
BODO, Rodolfo Luis
BONINO, Alberto Cecilio
BONOMI, Nora Susana
BOTTA, Felipe Esteban
BRITOS, Oscar Felipe
BULACIO, Julio Segundo
CABELLO, Luis Victorino
CACERES, Luis Alberto
CAFERRI, Oscar Néstor
CAMISAR, Osvaldo
CAMPS, Alberto Germán
CANICOBA, Ramón Héctor Pedro
CANTOR, Rubén
CAPUANO, Pedro José
CARMONA, Jorge
CARRIZO, Raúl Alfonso Corpus
CASALE, Luis Santos
CASSIA, Antonio

CASTIELLA, Juan Carlos
CASTILLO, Miguel Ángel
CAVALLARI, Juan José
CAVALLARO, Antonio Gino
COLOMBO, Ricardo Miguel
CONNOLLY, Alfredo Jorge
CONTE, Augusto
COPELLO, Norberto Luis
CORNAGLIA, Ricardo Jesús
CORTESE, Lorenzo Juan
CORZO, Julio César
CURATOLO, Atilio Arnold
CHAZARRETA, Pastor V. O.
CHEHIN, Jorge Víctor
DAUD, Ricardo
DEBALLI, Héctor Gino
DE LA VEGA de MALVASIO, Lily M. D.
DE NICHILLO, Cayetano
DÍAZ de AGÜERO, Dolores
DÍAZ-LECAM, Juan Antonio
DI CIO, Héctor
DIMASI, Julio Leonardo
DONAIRES, Fernando
DOUGLAS RINCÓN, Guillermo F.
DOVENA, Miguel Dante
DRUETTA, Raúl Augusto
DUSSOL, Ramón Adolfo
ELIZALDE, Juan Francisco Carmelo
FALCIONI de BRAVO, Ivelise Ilda
FAPPIANO, Oscar Luján
FEDERIK, Carlos Alberto
FINO, Torcuato Enrique
FURQUE, José Alberto
GARCIA, Antonio Matías
GARCIA, Carlos Euclides
GARCIA, Roberto Juan
GHIANO, Jorge Osvaldo
GIMÉNEZ, Jacinto
GINZO, Julio José Oscar
GÓMEZ MIRANDA, María Florentina
GONZÁLEZ, Arnaldo
GONZÁLEZ, Héctor Eduardo
GONZÁLEZ, Jesús Gerónimo
GONZÁLEZ, Raúl Héctor
GONZÁLEZ CABANAS, Tomás Walther
GONZÁLEZ PASTOR, Carlos María

GOROSTEGUI, José Ignacio
GOTI, Erasmo Alfredo
GRIMAU, Arturo Aníbal
GUATTI, Emilio Roberto
GUELAR, Diego Ramiro
GURIOLI, Mario Alberto
GUTIERREZ, Reinaldo Pastor
GUZMAN, María Cristina
HERRERA, Bernardo Eligio
HORTA, Jorge Luis
HUARTE, Horacio Hugo
IBÁÑEZ, Diego Sebastián
IGLESIAS VILLAR, Teófilo
INGARAMO, Emilio Felipe
JALILE, José Félix
JAROSLAVSKY, César
JIMÉNEZ, Francisco Javier
KHOURY, Miguel Ángel
LANGAN, Roberto José
LAZCOZ, Hernaldo Efraín
LEALE, Zelmar Rubén
LENCINA, Luis Ascensión
LEPORI, Pedro Antonio
LESCANO, David
LESTANI, Carlos
LIPTAK, Teodoro
LÓPEZ, Santiago Marcelino
LUGONES, Horacio Emerico
MAGLIETTI, Alberto Ramón
MANNY, José Juan
MANZANO, José Luis
MANZUR, Alejandro
MARCESINI, Víctor Carlos
MARTÍN, Belarmino Pedro
MARTÍNEZ, Valentín del Valle
MARTÍNEZ MARQUEZ, Miguel José
MARTÍNEZ MARTINOLI, Fausta G.
MASINI, César Francisco
MASTOLORENZO, Vicente
MATOS, Salvador León
MATZKIN, Jorge Rubén
MAYA, Héctor María
MEDINA, Alberto Fernando
MEDINA, Miguel Heraldo
MELÓN, Alberto Santos
MIGLIOZZI, Julio Alberto

MILANO, Raúl Mario
 MINICHILLO, Juan José
 MONSERRAT, Miguel Pedro
 MORAGUES, Miguel José
 MOREAU, Leopoldo Raúl
 MOTHE, Félix Justiniano
 NEGRI, Arturo Jesús
 NIEVA, Próspero
 PALEARI, Antonio
 PAPAGNO, Rogelio
 PATINO, Artemio Agustín
 PECHE, Abdol Carim Mahomed
 PEDRINI, Adam
 PELAEZ, Anselmo Vicente
 PEPE, Lorenzo
 PEREYRA, Pedro Armando
 PÉREZ, René
 PÉREZ VIDAL, Alfredo
 PERL, Néstor
 PINTOS, Carlos María Jesús
 PIUCILL, Hugo Diógenes
 PLANELL, Mariano Juan
 PRADO, Leonardo Ramón
 PRONE, Alberto Josué
 PUGLIESE, Juan Carlos
 PUFILLO, Liborio
 PURITA, Domingo
 RABANAQUE, Raúl Octavio
 RAMOS, Daniel Omar
 RAPACINI, Rubén Abel
 RATKOVIC, Milivoj
 RAUBER, Cleto
 REALI, Raúl
 RESTOVICH, Francisco
 REYNOSO, Adolfo
 RIGATUSO, Tránsito
 RIQUEZ, Félix
 RIUTORT de FLORES, Olga Elena
 ROBERTO, Mario
 ROBSON, Anthony
 RODRIGUEZ, Antonio Abel
 RODRIGUEZ, Jesús
 RODRIGUEZ, Manuel Alberto

RODRIGUEZ, Pedro Salvador
 RODRIGUEZ ARTUSI, José Luis
 ROMANO, Domingo Alberto
 ROMERO, Antonio Elías
 ROMERO, Francisco Telmo
 RUBEO, Luis
 RUIZ, Ángel Horacio
 RUIZ, Osvaldo Cándido
 SABADINI, José Luis
 SALDUNA, Bernardo Ignacio Ramón
 SAMMARTINO, Roberto Edmundo
 SANCHEZ, Eduardo
 SANCHEZ TORANZO, Nicasio
 SARQUIS, Guillermo Carlos
 SARUBI, Pedro Alberto
 SCELZI, Carlos María
 SERRALTA, Miguel Jorge
 SILVA, Roberto Pascual
 SILVERO, Lisandro Antonio
 SOBRINO ARANDA, Luis Alberto
 SOCCHI, Hugo Alberto
 SPINA, Carlos Guido
 SRUR, Miguel Antonio
 STAVALE, Juan Carlos
 STOLKINER, Jorge
 STUBRIN, Adolfo Luis
 STUBRIN, Marcelo
 SUÁREZ, Lionel Armando
 TAIBO, Nicolás
 TELLO ROSAS, Guillermo Enrique
 TERRILE, Ricardo Alejandro
 TORRESAGASTI, Adolfo
 TOSI, Santiago
 URRIZA, Luis María
 VANOSI, Jorge Reinaldo
 VIDAL, Carlos Alfredo
 VON NIEDERHAUSEN, Norberto B.
 YAMAGUCHI, Jorge Rokuro
 ZAVALLEY, Jorge Hernán

AUSENTES, EN MISION OFICIAL:
 BECERRA, Carlos Armando
 BORDÓN GONZÁLEZ, José Octavio

STORANI, Federico Teobaldo M.
 ZUBIRI, Balbino Pedro

AUSENTES, CON LICENCIA:

ALBARRACIN, Ignacio Arturo ¹
 ALIAS, Manuel ¹
 BARBEITO, Juan Carlos ¹
 BASUALDO, Héctor Alfredo ¹
 BRIZ de SANCHEZ, Onofre ¹
 BRIZUELA, Juan Arnaldo ¹
 CARDOZO, Ignacio Luis Rubén
 CORTINA, Julio
 DOMÍNGUEZ FERREYRA, Dardo N. ¹
 FERÉ, Carlos Eduardo ¹
 FIGUEROA de TOLOZA, Emma ¹
 FLORES, Aníbal Eulogio ¹
 IMBELLONI, Norberto ¹
 MONTERO, Carlos Lucio ¹
 MOSSO, Alfredo Miguel ¹
 NADAL, Marx José ¹
 ZINGALE, Felipe ¹

AUSENTES, CON AVISO:

ARAOZ, Julio César
 BRITO LIMA, Alberto
 CARRANZA, Florencio
 CORPACCI, Sebastián Alejandro
 DALMAU, Héctor Horacio
 LANDÍN, José Miguel
 MIRANDA, Julio Antonio
 ORGAMBIDE, Luis Oscar
 PONCE, Rodolfo Antonio
 REGGERA, Esperanza
 SELLA, Orlando Enrique
 SOLARI BALLESTEROS, Alejandro
 TORRES, Carlos Martín
 UNAMUNO, Miguel
 VISTALLI, Francisco José

¹ Solicitud pendiente de aprobación de la Honorable Cámara.

SUMARIO

1. Continúa la consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal de 1985 (17-P.E.-85 y 19-P.E.-85). (Pág. 4097.)
2. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Pepe con motivo de expresiones del señor diputado Furque. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. 4111.)
3. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 1 de este sumario. Se sanciona con modificaciones. (Pág. 4112.)
4. Moción de orden del señor diputado Jaroslavsky de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a efectos de ampliar el plan de labor para la presente sesión. Se aprueba. (Pág. 4128.)
5. Consideración del dictamen de las comisiones de Industria, de Comercio, de Agricultura y Ganadería y de Legislación Penal en los proyectos de ley del Poder Ejecutivo (78-P.E.-84) y del señor

diputado Mothe y otros (2.149-D.-84) sobre régimen para la regulación de la producción de fructosa y azúcar de remolacha. Se sanciona con modificaciones. (Pág. 4129.)

6. Moción del señor diputado Rodríguez (J.) de reconsideración del artículo 41 del proyecto de ley por el que se establece el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal de 1985. Se aprueba. (Pág. 4154.)
7. Consideración de la nueva redacción propuesta por el señor diputado Rodríguez (J.) para el artículo 41 del proyecto de ley al que se refiere el número 6 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 4155.)
8. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se introducen modificaciones a la ley de impuesto a las ganancias (102-P.E.-84). Se sanciona. (Página 4155.)
9. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se introducen modificaciones a la ley de impuesto sobre los beneficios eventuales (98-P.E.-84). Se sanciona. (Pág. 4202.)

10. Consideración del dictamen de las comisiones de Justicia y de Previsión y Seguridad Social en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el régimen de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación (79-S.-84). Se sanciona. (Pág. 4211.)
11. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Previsión y Seguridad Social en el proyecto de ley de la señora diputada Gómez Miranda sobre sustitución del artículo 1º, inciso a) de la ley 17.562 - derecho a pensión (43-D.-84). Se sanciona. (Pág. 4213.)
12. Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General (especializada) en las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre edición de las obras del teniente general Juan Domingo Perón (2.422-D.-84). Se sanciona definitivamente (*ley* 23.227). (Pág. 4214.)
13. Consideración del dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre cómputo a los efectos jubilatorios de los períodos de inactividad comprendidos desde la vigencia de la ley 20.565 hasta el 9 de diciembre de 1983 para las personas que por motivos políticos o gremiales fueron dejadas cesantes, declaradas prescindibles o forzadas a renunciar a sus cargos públicos o privados (4-P.E.-85). Se sanciona con modificaciones. (Pág. 4215.)
14. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y de los Territorios Nacionales en los proyectos de ley de los señores diputados Pupillo (2.570-D.-84) y Bernasconi (299-D.-85) por los que se modifican las disposiciones de la ley de facto 19.987, orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, concernientes a los consejos vecinales. Se sanciona. (Pág. 4231.)
15. Consideración del dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social, de Legislación del Trabajo y de Asistencia Social y Salud Pública en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se lo autoriza por tiempo determinado a equilibrar con recursos genuinos el presupuesto del Sistema Nacional de Previsión Social (85-P.E.-84). Se aprueba en general y se aplaza su tratamiento en particular. (Pág. 4236.)
16. Consideración del proyecto de ley de los señores diputados Gutiérrez y Vidal sobre modificación de los límites del Parque Nacional Nahuel Huapi y transferencia del área segregada a la provincia del Neuquén para la construcción de un centro de deportes invernales para la práctica del esquí (2.192-D.-85). Se sanciona. (Pág. 4239.)
17. Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de declaración del señor diputado Botta por el que se solicita al Poder Ejecutivo que declare de interés nacional el festival

cinematográfico a realizarse en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba (2.497-D.-85). Se sanciona. (Pág. 4243.)

18. Moción de orden del señor diputado Jaroslavsky de que se levante la sesión. Se aprueba. (Pág. 4243.)

19. Apéndice:

A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 4244.)

B. Asuntos entrados:

1. Proyecto de declaración del señor diputado Botta: solicitud al Poder Ejecutivo para que declare de interés nacional el festival cinematográfico a realizarse en Villa María, Córdoba (2.497-D.-85). (Pág. 4276.)

C. Inserciones. (Pág. 4276.)

—En Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre de 1985, a la hora 11 y 35:

1

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO 1985

Sr. Presidente (Pugliese). — Continúa la sesión.

Habiéndose agotado en la reunión anterior la consideración del artículo 1º del proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para 1985, corresponde pasar a votar dicho artículo¹.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 2º.

Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Rodríguez (J.) — Deseo aclarar que se ha deslizado un error en el Orden del Día Nº 1.114, a fin de que se efectúe la rectificación correspondiente. En el artículo 2º del proyecto la cantidad expresada en números no coincide con la expresada en letras, que es la correcta. Por lo tanto, deben agregarse tres ceros a la cifra que figura entre paréntesis, que de esa forma quedaría en 6.517.689.000 australes.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 2º, con la corrección indicada por el señor diputado por la Capital.

—Resulta afirmativa.

—Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 3º a 11.

¹ Véase el texto del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (Orden del Día Nº 1.114) en el Diario de Sesiones del 22 de agosto de 1985, página 3579.

Buenos Aires, 19 de junio de 1985.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que se dispone la edición por la Imprenta del Congreso de la Nación de todas las obras publicadas por el teniente general don Juan Domingo Perón, y ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — La Imprenta del Congreso de la Nación procederá a editar en tirada económica todas las obras publicadas hasta el presente cuyo autor sea el teniente general don Juan Domingo Perón, en un número de 4.000 ejemplares en rústica y 1.000 ejemplares encuadernados, todos ellos numerados.

Art. 2º — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán al presupuesto del Poder Legislativo —jurisdicción 01—, afectando la partida de remanentes del presente ejercicio.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

VÍCTOR H. MARTÍNEZ.
Antonio J. Macrís.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación General —especializada—, al considerar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, acepta la reforma introducida al artículo 2º, y aconseja la aprobación del proyecto de ley adjunto.

Tomás W. González Cabañas.

ANTECEDENTE

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1984.

Señor presidente del Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado en sesión de la fecha el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — La Imprenta del Congreso de la Nación procederá a editar en tirada económica todas las obras publicadas hasta el presente cuyo autor sea el teniente general don Juan Domingo Perón, en un número de 4 000 ejemplares en rústica y 1.000 ejemplares encuadernados, todos ellos numerados.

Art. 2º — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán a "Rentas generales".

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Diós guarde al señor presidente.

JUAN C. PUGLIESE.
Carlos A. Bravo.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración. Se va a votar si se acepta la modificación introducida por el Honorable Senado al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley¹.

Se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.

13

COMPUTO DE PERIODOS DE INACTIVIDAD A LOS EFECTOS JUBILATORIOS

(Orden del Día Nº 1089)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo han considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo mediante el cual se posibilita el cómputo, al solo efecto jubilatorio de los periodos de inactividad comprendidos desde la vigencia de la ley 20.565 hasta el 9 de diciembre de 1983, para las personas que por motivos políticos o gremiales fueron dejadas cesantes, declaradas prescindibles o forzadas a renunciar a sus cargos públicos o privados; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Las personas que por motivos políticos o gremiales fueron dejadas cesantes, declaradas prescindibles o forzadas a renunciar a sus cargos públicos o privados, o se vieron obligadas a exiliarse, desde la fecha de la vigencia de la ley 16.001, podrán computar, al solo efecto jubilatorio, en los regímenes para trabajadores en relación de dependencia o autónomos, según corresponda, el período de inactividad comprendido entre el momento en que cesaron en sus tareas y el 9 de diciembre de 1983.

Art. 2º — El reconocimiento del período de inactividad deberá solicitarse, dentro de los noventa (90) días de vigencia de esta ley, ante la Caja Nacional de Previsión a la que el peticionante se encontraba afiliado en razón del cargo o empleo en que se produjo el acto que originó la cesación en el servicio, o de la actividad que debió abandonar por el exilio. Dicho reconocimiento, surtirá también efectos para la determinación de la caja otorgante del beneficio.

Art. 3º — Quienes soliciten el reconocimiento de períodos de inactividad deberán acreditar fehacientemente la causa política o gremial que originó la cesación en el servicio.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 4244.)

No procederá el reconocimiento de períodos de inactividad si el acto que originó la cesación en el servicio se hubiera producido con relación a cargos o empleos públicos que por su naturaleza no gozaban de estabilidad o estaban condicionados a requisitos no cumplidos a la fecha de ese acto para el goce de la estabilidad.

Art. 4º — El derecho acordado por la presente ley podrá ser ejercido, a los mismos efectos, por los causahabientes de las personas que hubieran podido hacer valer el reconocimiento de períodos de inactividad.

Art. 5º — El reconocimiento respectivo quedará sujeto a la formulación de cargos por aportes, los cuales, a elección del interesado, podrán ser deducidos de los haberes a los cuales se tenga derecho.

Para la determinación de los cargos en el régimen para trabajadores en relación de dependencia se tomará la remuneración correspondiente al empleo desempeñado, actualizada a la fecha de su efectivo pago.

Las cajas nacionales de previsión tomarán a su cargo las contribuciones patronales correspondientes a la antigüedad reconocida.

Art. 6º — El derecho a la percepción de haberes jubilatorios resultantes de la aplicación de esta ley, nacerá a partir del primer día del mes en que se formule expresamente la solicitud de acogimiento a la misma, salvo que como consecuencia de la adición al período de inactividad de servicios prestados después de ese lapso, el cierre del cómputo definitivo fuera posterior a la fecha de la mencionada solicitud.

Art. 7º — La Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social queda facultada para dictar las normas complementarias y aclaratorias de la presente ley.

Art. 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 1º de agosto de 1985.

Zelmar R. Leale. — Roberto E. Sammartino. — Cayetano De Nichilo. — Santiago D. Tosi. — Roberto P. Alvarez. — Ramón R. Aguilar. — Adrián C. Alvarez. — Marcelo M. Arbolaza. — Tulio M. Bernasconi. — Victorio O. Bisciotti. — Alberto Brito Lima. — Julio S. Bulacio. — Luis V. Cabello. — Ramón H. P. Canicoba. — Ricardo J. Cornaglia. — Julio C. Corzo. — José Costarelli. — Roberto J. García. — Carlos M. González Pastor. — José I. Gorostegui. — María C. Guzmán. — Pedro A. Lepori. — Carlos Lestani. — Horacio E. Lugones. — Alberto R. Maglietti. — Valentín del Valle Martínez. — Fausta B. Martínez Martinoli. — Vicente Mastolorenzo. — Alberto F. Medina. — Abdol C. M. Peche. — Lorenzo A. Pepe. — Pedro A. Pereyra. — Esperanza Reggera. — Adolfo Reynosa. — Pedro S. Rodríguez. — José L. Sabadini.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo, al considerar el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo tendiente a po-

sibilitar, al solo efecto jubilatorio, el cómputo de los períodos de inactividad a que se vieron obligadas las personas que fueron dejadas cesantes, declaradas prescindibles o forzadas a renunciar a sus cargos públicos o privados por motivos políticos o gremiales, han tenido en cuenta el propósito reivindicatorio de los mismos.

En tal sentido, a través del dictamen que se acompaña, extienden el beneficio emergente a partir de la vigencia de la ley 16.001, entendiendo que en el lapso transcurrido entre noviembre de 1961 y noviembre de 1973 se produjeron prescindibilidades, cesantías o renunciaciones forzadas por gobiernos de facto de las enunciadas en el proyecto, cuya reivindicación se pretende —si bien se procuró mediante las leyes 16.460 y la citada 20.565—, razones administrativas ajenas a la voluntad de los beneficiados hicieron que unos pocos de éstos no obtuvieran el reconocimiento pretendido, por lo cual solicitamos que esta Cámara, mediante la aprobación del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, con las modificaciones introducidas, contribuya a su sanción imprimiéndole el carácter de estricta justicia.

Zelmar R. Leale.

ANTECEDENTE

Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 21 de mayo de 1985.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo se dirige al Honorable Congreso de la Nación con el objeto de elevar el adjunto proyecto de ley por el cual se posibilita el cómputo, al solo efecto jubilatorio, de los períodos de inactividad comprendidos desde la fecha de vigencia de la ley 20.565, hasta el 9 de diciembre de 1983, en favor de todas aquellas personas que por motivos políticos o gremiales fueron dejadas cesantes, declaradas prescindibles o forzadas a renunciar a sus cargos públicos o privados o se vieron obligadas a exiliarse.

El proyecto de ley que hoy se somete a la consideración de vuestra honorabilidad reconoce diversos antecedentes en nuestra legislación previsional, tales como el decreto ley 4.827/58 y las leyes 16.001, 16.460 y 20.565, normas que permitieron, de alguna manera, dar reparación en el tiempo a quienes arbitrariamente habían sido alejados de sus empleos.

La República, reencauzada definitivamente en su plenitud institucional, no puede, entonces, hoy desentenderse de las secuelas de persecuciones políticas ocurridas en el pasado reciente.

La presente iniciativa se inspira en los mismos propósitos que dieron origen a los precedentes citados, como también en el proyecto que vuestra honorabilidad sancionara con fecha veintiocho de septiembre de 1984, pero que este Poder Ejecutivo se vio obligado a devolver sin promulgar, por las razones que se expusieron en el mensaje respectivo. Encuadrándola en el mismo espíritu generoso de sus antecesoras, se ha tratado de ajustarla más acabadamente a las normas del régimen nacional de previsión, a fin de evitar que

una extensión dilatada de sus alcances derive en un perjuicio para el universo de beneficiarios como consecuencia del incremento de los egresos del sistema.

A esa misma preocupación responde la formulación de cargos por aportes no realizados que se incluye en el proyecto, permitiendo saldarlos en cuotas, aun después de acordada la prestación.

La iniciativa fija como fecha inicial de pago de los beneficios que se acuerden con motivo del cómputo autorizado, el primer día del mes en que se formule expresamente la solicitud de acogimiento, a fin de evitar el cobro de retroactividades que vendrían a ser infundadas, dado que el derecho a computar en forma ficta el período de inactividad se origina con motivo del proyecto cuya sanción se promueve.

Por ello, el Poder Ejecutivo solicita de vuestra honorabilidad tenga a bien darle prioridad en su tratamiento y aprobación.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 917

RAÚL R. ALFONSÍN.
Hugo M. Barrionuevo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Las personas que por motivos políticos o gremiales fueron dejadas cesantes, declaradas prescindibles o forzadas a renunciar a sus cargos públicos o privados, o se vieron obligadas a exiliarse, desde la fecha de vigencia de la ley 20.565, podrán computar, al solo efecto jubilatorio, en los regímenes para trabajadores en relación de dependencia o autónomos, según corresponda, el período de inactividad comprendido entre el momento en que cesaron en sus tareas y el 9 de diciembre de 1983.

Art. 2º — El reconocimiento del período de inactividad deberá solicitarse, dentro de los noventa (90) días de vigencia de esta ley, ante la Caja Nacional de Previsión a la que el peticionante se encontraba afiliado en razón del cargo o empleo en que se produjo el acto que originó la cesación en el servicio, o de la actividad que debió abandonar por el exilio. Dicho reconocimiento surtirá también efectos para la determinación de la caja otorgante del beneficio.

Art. 3º — Quienes soliciten el reconocimiento de períodos de inactividad deberán acreditar fehacientemente la causa política o gremial que originó la cesación en el servicio.

No procederá el reconocimiento de períodos de inactividad si el acto que originó la cesación en el servicio se hubiera producido con relación a cargos o empleos públicos que por su naturaleza no gozaban de estabilidad o estaban condicionados a requisitos no cumplidos a la fecha de ese acto para el goce de la estabilidad.

Art. 4º — El derecho acordado por la presente ley podrá ser ejercido, a los mismos efectos, por los causahabientes de las personas que hubieran podido hacer valer el reconocimiento de períodos de inactividad.

Art. 5º — El reconocimiento respectivo quedará sujeta a la formulación de cargos por aportes, los cuales,

a elección del interesado, podrán ser deducidos de los haberes a los cuales se tenga derecho.

Para la determinación de los cargos en el régimen para trabajadores en relación de dependencia se tomará la remuneración correspondiente al empleo desempeñado, actualizada a la fecha de su efectivo pago.

Las cajas nacionales de previsión tomarán a su cargo las contribuciones patronales correspondientes a la antigüedad reconocida.

Art. 6º — El derecho a la percepción de haberes jubilatorios resultantes de la aplicación de esta ley, nacerá a partir del primer día del mes en que se formule expresamente la solicitud de acogimiento a la misma, salvo que como consecuencia de la adición al período de inactividad de servicios prestados después de ese lapso, el cierre del cómputo definitivo fuera posterior a la fecha de la mencionada solicitud.

Art. 7º — La Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social queda facultada para dictar las normas complementarias y aclaratorias de la presente ley.

Art. 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Hugo M. Barrionuevo.

OBSERVACIONES

1

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos Pugliese.

S/D.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en los términos del artículo 95, segundo párrafo, del Reglamento de esta Honorable Cámara, con el objeto de proponer modificaciones al dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo contenido en el Orden del Día Nº 1.089 (expediente 4-P.E.-85).

El mensaje 917 que acompaña la iniciativa fundamenta la misma en una premisa que compartimos sin hesitación: "La República reencauzada definitivamente en su plenitud institucional no puede desentenderse de las secuelas de persecuciones políticas ocurridas en el pasado reciente".

Sin embargo, las disposiciones que la administración y las comisiones nos sugieren adoptar no se compadecen plenamente con tal plausible principio, en tanto dejan sin reconocimiento legislativo a otros derechos de igual entidad que la del contenido en ellas y necesitados de una adecuada instrumentación para que puedan ser ejercidos. Y, por cierto, nos referimos a derechos de obvia inserción constitucional: igualdad ante la ley, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público (artículos 14 y 14 bis de nuestra ley mayor).

Esta falencia parece reconocer su origen en un deficiente acopio de los antecedentes producidos en situaciones históricas similares a la presente como lo evidencia la omisión de su cita (ley 20.508, decretos 1.543/73, 1.774/74, resolución conjunta 4.875/74 de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, entre otros).

Nuestra propuesta se inspira, precisamente, en esa legislación omitida como referencia —de manera principalísima en el decreto 1.543 del 21 de mayo de 1974 dictado por el entonces presidente Perón— y se corresponde tanto con las modificaciones que el bloque justicialista —mediante nota del 19 de junio de 1984 suscrita por los diputados Ibáñez, Pepe, Corzo, Carranza, Reggera, Ruiz, Sabadini y De Nichilo— requiriera para el proyecto venido en revisión del Senado (4-S.-84), luego convertido en la ley 23.104, vetada por el Poder Ejecutivo; cuanto con el proyecto que la Confederación de Gremios de Trabajadores Estatales (CGTE), entidad representativa de más de 1.500.000 trabajadores, elevara al Poder Ejecutivo mediante nota del 15 de octubre de 1984 dirigida al secretario de Estado de la función pública.

También se han analizado y valorado sin prejuicios sectarios las iniciativas de los diputados Pupillo y Tossi (271-D.-83), Jesús G. González, Pepe, Basualdo, Bonino, Antonio M. García, Roberto J. García, Gurioli, De Minichillo, Manuel A. Rodríguez, Torresagasti y Unamuno (288-D.-83); Bernasconi, Sammartino, Colombo, González Pastor y Vidal (296-D.-83), y Romano y Jesús Rodríguez (1.600-D.-84).

Igualmente se han tenido como ineludibles dos proyectos de ley sancionados por esta Honorable Cámara: mediante el primero, se posibilitó a todas las personas que hubieran sido titulares de cargos electivos, a quienes se les hubiere impedido el desempeño de su mandato, el cómputo del período restante hasta la conclusión del mismo para todos los fines que en función de la antigüedad acuerden los regímenes estatutarios, escalafonarios y de licencias correspondientes a la actividad laboral que se encuentren desarrollando en la actualidad (sancionado el 29 de septiembre de 1984, expediente 2.988-D.-84); por el segundo, se facultó al Poder Ejecutivo a aplicar a los jefes y oficiales del Ejército que fueron pasados a retiro obligatorio en el año 1980, las normas sobre restitución de derechos, previstas en el decreto 1.332/73 (sancionado el 8 de mayo de 1985).

El proyecto original validado por el despacho contiene una drástica limitación que lo torna insuficiente para cumplir con el propósito enunciado en el mensaje que lo precede. En efecto, reducir los límites del cómputo “al solo efecto jubilatorio” podrá servir para acelerar la reducción del personal estatal a través del egreso de ciertos agentes, pero, en modo alguno, alcanza para reparar —en lo que resulta reparable— los daños sufridos por quienes todavía siguen padeciendo “las secuelas de persecuciones ocurridas en el pasado reciente”, situación que agravia a la justicia y a la democracia.

Nuestra propuesta consiste, en cambio, en restituir los derechos conculcados a los trabajadores a partir del cómputo a todos los efectos legales del período de exclusión, aunque sin retroactividad. En suma, el agente deberá gozar de los mismos derechos de que gozaría si no hubiere sido víctima del hecho ilegítimo e injusto de su cesantía, prescindibilidad o renuncia impuesta.

Así se hizo luego de la asunción del gobierno constitucional el 25 de mayo de 1973. Por ello, resulta equívoca la referencia a la ley 20.565, pues ésta estuvo precedida por la ley 20.508 que extinguió de pleno

derecho todas las sanciones disciplinarias o de carácter ético aplicadas por motivos políticos, sociales o gremiales y mandó reglamentar “el procedimiento para efectuar las reincorporaciones y restitución de derechos”, lo que se cumplió mediante el decreto 1.171/73 del 13 de septiembre de 1973. Esto supuso que cuando el 21 de noviembre de ese año se sancionó la ley 20.565, ésta obró como complemento de esas medidas reparatorias ya vigentes y no como pieza única y exclusiva. Situación que, sin embargo, el entonces presidente Perón estimó insatisfactoria, por lo que procedió a dictar el decreto 1.543 del 21 de mayo de 1974, reconociendo a los trabajadores “los beneficios que en función de su antigüedad acuerden sus regímenes estatutarios, escalafonarios o de licencias”. Consecuentemente reproducimos esta norma incluyéndola en el artículo primero, adicionando a la enumeración los convenios colectivos y toda otra norma general o especial. Incorporamos, entonces, este concepto al artículo primero del proyecto, haciéndolo extensivo también a quienes se vieron obligados a exiliarse. Proponemos, además, se determine que el agente podrá solicitar el cómputo de todo el período en que permaneció forzosamente excluido, es decir, desde el momento del cese ilegítimo de la relación laboral hasta el de su reincorporación, desechando los límites temporales de la iniciativa del Poder Ejecutivo, pues ella parece por una parte admitir la existencia de cesantías ilegítimas durante el anterior gobierno constitucional y por la otra suponer que el 10 de diciembre de 1983 se produjo la reincorporación de todos los perseguidos políticos, hecho que obviamente no es exacto. Si se admitiera esta fecha como tope máximo para el lapso a ser computado se produciría en los muchos casos de agentes reincorporados con varios meses de postergación “claros”, paradójales e injustos, entre la antigüedad reconocida y el reinicio de la relación laboral.

Manteniendo un similar número de artículos, nuestra propuesta pretende la modificación de algunos de ellos en orden a estas premisas:

1º — La presunción *juris et jure* de la existencia de causa política o gremial cuando el cese haya sido impuesto sin haberse incoado sumario ni dictado sentencia o el exiliado haya sido un militante político o gremial.

2º — El cómputo para la determinación del haber jubilatorio sobre la base de la categoría de revista que resulte de la aplicación de la nueva ley.

3º — La exención para el agente del pago de contribuciones sobre sueldos o salarios que jamás percibió.

4º — La promoción de los agentes públicos de acuerdo a sus respectivos regímenes escalafonarios con referencia a la ley 23.032, artículo 5º, como norma sustitutiva.

En consecuencia, proponemos como texto del dictamen de las comisiones, el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º — Las personas que por motivos políticos o gremiales fueron dejadas cesantes, declaradas prescindibles o forzadas a renunciar a sus cargos públicos o privados, o se vieron obligadas a exiliarse durante

el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983, ahora reincorporadas y quienes se reincorporen en lo sucesivo, podrán computar el lapso de inactividad forzosa en el cargo desde la cesación en el servicio hasta la fecha de su reincorporación, para la determinación de todos los beneficios que en función de la antigüedad le acuerden sus regímenes estatutarios, escalafonarios y de licencia, los convenios colectivos, el régimen previsional y toda otra norma general o especial.

Art. 2º — El reconocimiento de esos derechos se aplicará a los titulares de los mismos respecto de los beneficios a que sean acreedores a partir del momento en que se haya producido o se produzcan las reincorporaciones.

Art. 3º — Quienes soliciten el reconocimiento deberán acreditar fehacientemente la causa política o gremial que originó la cesación en el servicio o el exilio.

Se presumirá de pleno derecho la existencia de esa causa cuando la cesación haya sido impuesta sin haberse incoado sumario previo, ni dictado sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada o el exiliado haya poseído una militancia política o gremial notoria o su salida del país haya sido dispuesta mediante un acto de quienes usurpaban el gobierno.

Art. 4º — Cuando el reconocimiento de la antigüedad posibilitare al titular o a sus causahabientes la obtención inmediata de la jubilación o pensión, respectivamente, el cómputo de aquélla deberá solicitarse dentro de los noventa (90) días de vigencia de esta ley por ante la caja nacional de previsión a la que se encontraba afiliado el titular en razón del cargo o empleo respecto del que se produjo el acto que originó la cesación en el servicio o de la actividad que debió abandonar por el exilio. Dicho cómputo surtirá también efectos para la determinación de la caja otorgante del beneficio.

Quando al agente reincorporado se le conceda el beneficio de la jubilación, se le computará a este efecto como promedio de los últimos años de trabajo según las normas en la materia, el haber conforme a la categoría de revista que resulte de la aplicación de la presente ley. Esta aplicación también podrá ser solicitada por el agente actualmente jubilado cuando la misma irroque un aumento de sus haberes. Cuando no existiere inmediatez, el reconocimiento de la antigüedad podrá solicitarse en todo tiempo anterior al inicio de la gestión de jubilación o pensión y equivaldrá plenamente al reconocimiento de servicios.

Art. 5º — El derecho a la percepción de haberes jubilatorios resultantes de la aplicación de esta ley nacerá a partir del primer día del mes en que se formule expresamente la solicitud de acogimiento a la misma, salvo que como consecuencia de la adición al período de inactividad forzosa de servicios prestados después de ese lapso, el cierre del cómputo definitivo fuere posterior a la fecha de la mencionada solicitud.

Art. 6º — Las cajas nacionales de previsión tomarán a su cargo todas las contribuciones determinadas por la antigüedad reconocida sin perjuicio de la provisión de fondos especiales que se determinen por la ley de presupuesto general.

Art. 7º — La promoción de los agentes de la administración pública nacional, de los entes descentralizados, empresas del Estado, sociedades del Estado o de economía mixta, del Honorable Congreso de la Nación, del Poder Judicial y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires comprendidos en el artículo 1º se efectuará según las disposiciones de sus respectivos regímenes escalafonarios dentro de los treinta días de interpuesta la pertinente solicitud, si poseyeran la idoneidad requerida para el desempeño de las nuevas funciones que deban adjudicárseles, con tope en el máximo de la escala. Si no existieren normas específicas, la promoción se hará a razón de una categoría por cada dos años o fracción no menor de un año de exclusión forzosa.

Quando para el goce de alguno de estos beneficios se requiera una calificación determinada, se considerará que el agente mantuvo el promedio de las que le correspondieron en los dos últimos años de actividad.

Si la reincorporación se hubiere producido a un organismo distinto del de procedencia por no existir éste, será aplicable al agente el régimen escalafonario de su nuevo destino.

Art. 8º — Las promociones se efectuarán dentro de las previsiones presupuestarias de los respectivos organismos y si no hubiere vacantes, el ascenso se efectuará hasta la categoría inmediata inferior, en cuyo caso los agentes recibirán complementariamente la diferencia de remuneraciones que correspondieren, la que será imputada a los créditos disponibles en el ítem "personal" del presupuesto pertinente. Tratándose de personal jerárquico se otorgará la categoría correspondiente hasta el máximo de la escala y en este caso deberán asignárseles funciones como adjunto del titular de la especialidad, con beneficios iguales a los gozados por éste.

Art. 9º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludamos al señor presidente con nuestra distinguida consideración.

Miguel D. Dovená. — José L. Manzano.

2

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan Carlos Pugliese.

S/D.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de formular observación al dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo, contenida en el Orden del Día Nº 1.089, referida a la ley 16.001.

En tal sentido, efectuamos la correspondiente observación reglamentaria, la que fundaremos en su oportunidad.

Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.

Alvaro C. Alsogaray. — José J. Manny.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Leale. — Señor presidente: este proyecto viene a hacer justicia en materia de previsión con los trabajadores que fueron víctimas de los gobiernos de facto, puesto que autoriza el reconocimiento del cómputo de los servicios no acreditados durante los períodos de inactividad provocados por cesantías por causas políticas o gremiales o renunciadas obligadas.

Debo manifestar que el proyecto originario del Poder Ejecutivo parcializa este reconocimiento, ya que sólo tiene en cuenta las cesantías producidas durante el último gobierno de facto. Hemos mejorado el proyecto original haciendo que el acto de justicia comprenda todas las cesantías que tuvieron lugar durante todos los golpes de Estado habidos hasta el presente. Por este motivo es que solicito la aprobación de la iniciativa que presentamos.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Manzano. — Señor presidente: seguramente los miembros de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo habrán podido advertir que hemos presentado un proyecto alternativo. El hecho que motivó dicha presentación fue el de haber considerado que la reparación debe ser integral y no sólo a los efectos jubilatorios. Además, para ser devolutiva, tendría que situar a las víctimas de persecuciones políticas nuevamente en las condiciones en que se encontraban en momentos de producirse el hecho. Esto permitiría una reparación integral que no sólo contemplaría el aspecto previsional, sino que también compensaría todas las otras quitas que sufrieron como consecuencia de su destitución, persecución política, gremial o ideológica, probable exilio u obligación de renunciar.

Creemos que nuestro proyecto es más integrador y podría ser la base de la discusión. De todas formas, si la comisión no acepta este criterio, durante el tratamiento en particular podemos proponer las modificaciones que entendemos pertinentes al despacho de la comisión.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Qué criterio adopta la comisión?

Sr. Leale. — El proyecto al que se refiere el señor diputado por Mendoza dista en gran medida del espíritu del que ha remitido el Poder Ejecutivo, ya que lo modifica en todas sus partes. Por ese motivo es que la comisión no acepta la iniciativa propuesta, puesto que configura un proyecto distinto que motivaría otro tratamiento.

Sr. Presidente (Pugliese). — Con todo derecho el señor diputado ha presentado un proyecto alternativo.

Sr. Leale. — La comisión no lo acepta porque las modificaciones son demasiado profundas.

♦ **Sr. Presidente (Pugliese).** — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Maya. — Creo que todos coincidimos con el espíritu de establecer una legislación que repare en lo posible el daño que la actividad del régimen trajo sobre las espaldas de toda la sociedad argentina y fundamentalmente en el campo de la persecución de los militantes políticos y aun de las personas que de alguna forma revelaban una identificación con ideas políticas.

Sabemos que, más allá de nuestras intenciones, las circunstancias económicas, la realidad del Estado y su situación administrativa hacen imposible materializar una reparación integral; pero al menos existen principios básicos de correspondencia dentro del campo del derecho que permiten alcanzar una justicia mínima. Todos los gobiernos constitucionales, cuando reingresan a la vida institucional después de superar el duro trance de los años de dictadura, al menos han aportado soluciones en el campo previsional.

Consideramos que esto no sólo atañe a una esencial correspondencia jurídica, sino que también tiende a establecer una normativa que vaya más allá de la declamación del espíritu reparador. En consecuencia, además del reconocimiento de una situación de injusticia, concretamos la liberación en el campo de los reintegros previsionales.

Sin embargo, más allá de estas dos posibilidades, consideramos que debe primar una actitud de solidaridad con los militantes que fueron objeto de persecución. Mal podemos decir que estamos haciendo justicia cuando en la práctica les imponemos un pago de aportes para restablecer su situación previsional. Es decir que con esta iniciativa sólo declamamos justicia, ya que no la concretamos en ninguno de los aspectos contemplados por el proyecto. Por ello, en el tratamiento en particular vamos a proponer modificaciones que concilien el espíritu reparador de la ley con lo que establece su texto.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Martínez. — Señor presidente: me atrevo a robar unos segundos a mis colegas porque, más allá de la obligación que tengo como legislador, me siento comprometido moral y espiritualmente con mis hermanos trabajadores y obreros que conocen la militancia gremial y política. Digo esto sin que me interese cuál es la filosofía o la doctrina que profesan; sólo me

preocupan los castigos que debieron soportar durante los gobiernos de facto.

Cuando este proyecto llegó a la Comisión de Legislación del Trabajo me comuniqué con un grupo de viejos amigos peronistas, comunistas, socialistas y radicales que sufrieron la persecución de la tiranía de Juan Carlos Onganía. El gobierno constitucional del general Juan Perón y de la señora Isabel Perón no contó con el tiempo necesario para reparar las injusticias padecidas. Tanto es así que en mi Patagonia todavía existen casos de compañeros justicialistas que fueron exiliados. La persecución contra ellos no sólo se concretó en las censuras o en el encarcelamiento, sino que se los obligó a retirarse del país. Sus esposas todavía deambulan por los pasillos del Congreso de la Nación pidiendo amparo. Podría dar sus nombres, pero ello sería desleal e indiscreto.

Cuando llegó este proyecto pedí a mis amigos que tuvieran la calma y prudencia necesarias. Ya les había dicho una vez que nosotros teníamos que legislar para la reparación del hombre y la unidad latinoamericana.

Ahora, durante el tratamiento de este proyecto, sin haber consultado a mis pares me tomo el atrevimiento de exponer sucintamente lo que pasa por mi mente.

El proyecto viene a llenar la necesidad manifestada por el reclamo espiritual y material de quienes por sostener simplemente una doctrina o ciertos principios se vieron perseguidos por aquellos tiranos que siempre atentaron contra el pueblo, y fue enriquecido por la comisión que lo estudió.

No sería sincero si no dijera que en este proyecto primó la opinión del diputado justicialista Lescano pero no la sensatez del diputado Lorenzo Pepe ni la responsabilidad de los legisladores de la Unión Cívica Radical y de otros bloques, como el amigo de San Juan que integra la comisión, para enriquecer este proyecto yendo un poco hacia atrás en el tiempo, pues yo estoy hablando de la tiranía de Juan Carlos Onganía, de la cual quedan víctimas que no fueron reincorporadas ni reivindicadas.

En consecuencia, discrepo en parte con el señor legislador que me ha precedido en el uso de la palabra. Distinto hubiera sido si el gobierno hubiese encontrado las arcas del Estado en una situación normal.

No creo que sea necesario leer ciertos discursos del general Perón —que tengo sobre mi banca— en los que en la CGT explicaba a los dirigentes gremiales la necesidad de la prudencia.

En este momento, para terminar, no hago más que pedir prudencia, porque confío en este

gobierno y en el Parlamento y creo que la justicia va a llegar a través de una democracia cierta, segura y perdurable en el tiempo.

Me he visto en la obligación de manifestar modestamente todo esto. No pueden sollicitarme ni exigirme una oratoria brillante porque un obrero no puede expresarse más que con modestia, que a veces puede ser sensiblera pero sublime en su contenido espiritual y material. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Manzano. — Una vez más exhorto a la comisión, porque la diferencia entre los proyectos reside en la caracterización del hecho a reparar. La discusión es si hay que reparar la situación previsional de las víctimas de esto que alguien calificara como ley de la dictadura militar, infame y fascista, por lo que nosotros nos convertiremos en los abanderados de los declarados prescindibles para llevar la justicia que reclaman.

“Nosotros también fuimos declarados prescindibles, y para dar el ejemplo voy a solicitar mi reincorporación como empleado a la Caja de Asignaciones Familiares del Personal de la Estiba”. Estas manifestaciones que corresponden al primer ministro de Trabajo del gobierno constitucional nos inspiraron para pensar que el hecho a reparar no era el hecho previsional sino el ético y moral de aquellos ciudadanos que por su militancia política o gremial habían sido perseguidos, declarados prescindibles u obligados a renunciar con el advenimiento de la dictadura militar, quienes debían ser reparados como hombres de la democracia y no dárseles simplemente la posibilidad de obtener el haber jubilatorio.

Lo que pretende nuestra bancada por medio del proyecto que hemos presentado es que se reconozca que por el solo hecho de haber ocurrido la cesantía durante el período de gobierno militar, sin mediar sumario o sentencia judicial en firme con autoridad de cosa juzgada, se presume que esos casos caen bajo la situación de cesantía por causas políticas o gremiales.

Por otra parte, no sólo debe analizarse la situación que ha dado lugar a la percepción del haber jubilatorio, sino que también hay que determinar la categoría en que debería haber figurado el agente de no haber sido cesanteado, ya que no es lo mismo determinar el haber jubilatorio sobre la categoría alcanzada en 1976 o antes, que sobre la que hubiera tenido de haberse permitido seguir ascendiendo en el escalafón.

Quiere decir que debe haber no sólo una continuidad previsional sino también una continui-

dad en el escalafón y esto, a su vez, tiene que ver con el tema del haber básico.

En cuanto a la fecha de reparación, entendemos que existen normas dictadas por el gobierno constitucional anterior que, de haberse aplicado, habrían permitido reparar la totalidad de las situaciones preexistentes. Quizás quienes se han presentado ante la justicia para dirimir sus casos, no han sabido —por decirlo así— caminar por el plexo jurídico más adecuado, porque las normas a que aludo reconocían la inexorabilidad de la reparación y el reconocimiento del estado escalafonario de los cesanteados a los efectos de determinar el haber jubilatorio cuando correspondiere.

Por ello reitero que si la comisión no acepta el proyecto alternativo que hemos presentado, durante la discusión en particular del que en este momento consideramos propondremos las modificaciones correspondientes, porque nuestro propósito es lograr la reparación integral de quienes fueron tan tenazmente perseguidos y que, en algunos casos, hasta debieron exiliarse del país.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia aclara al señor diputado que la fundamentación que acaba de hacer ya fue efectuada, dentro del trámite reglamentario correspondiente, por el señor diputado Maya.

Por otra parte, no existe oposición al proyecto en general; lo que existe es un proyecto alternativo presentado por la bancada a la que pertenece el señor diputado.

Teniendo en cuenta que el dictamen de la comisión fue unánime y que sólo contiene observaciones respecto de algunos artículos, podemos proceder a la votación en general del proyecto y dejar la fundamentación de las modificaciones propuestas por el proyecto alternativo para la discusión en particular.

Se va a votar en general el proyecto de ley.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración en particular el artículo 1º.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Leale. — Señor presidente: tal como lo acaba de expresar el señor diputado Manzano, este proyecto tiende exclusivamente a otorgar una reparación previsional y con ese espíritu el Poder Ejecutivo lo envió a la consideración de esta Honorable Cámara. De manera que no podemos aceptar introducir en él reparaciones de otra índole, desde el momento en que —como bien ha apuntado el señor presidente— la co-

misión correspondiente emitió un dictamen por unanimidad.

Sr. Presidente (Pugliese). — Durante la discusión en general el señor diputado Manzano ha planteado un proyecto del que es autor junto con el señor diputado Dovená, que contiene un artículo en sustitución del artículo 1º de este proyecto de ley. Dicha observación figura en un suplemento al Orden del Día Nº 1089 que está en poder de todos los señores diputados.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Manzano. — Señor presidente: realmente, la diferencia entre el artículo propuesto por la comisión y el nuestro podría circunscribirse a una frase, ya que el artículo 1º del dictamen, en su sexto renglón, dice: "... al solo efecto jubilatorio ...", mientras que nosotros reiteramos la hipótesis de la necesidad de la reparación integral, necesidad que vamos a fundar en la calificación de inmoral dada a la ley de prescindibilidad por un señor diputado del bloque mayoritario que se pronunció a la vez a favor de las reincorporaciones de los prescindidos por ser éste un tema de estricta justicia. Hay declaraciones del señor diputado Marcelo Stubrin a los diarios "La Nación" y "La Razón" del 23 de noviembre de 1983.

Por otro lado, los señores Pupillo y Tosi son autores de un proyecto de ley en el que sostienen que el agente reincorporado lo será en su cargo, con reconocimiento de la antigüedad, computado el lapso de la cesantía o prescindibilidad y las promociones que le hubieren correspondido de haber estado en servicio. En los fundamentos de dicha iniciativa dicen que: "A las autoridades constituidas, orientadas a la instauración definitiva de una democracia plena, las obliga a reparar estos actos injustificados".

En los fundamentos de otra iniciativa de los señores diputados Bernasconi, Sammartino, Colombo, González Pastor y Vidal, contenida en el Trámite Parlamentario Nº 4, página 87, se dice que: "Las medidas de facto tendientes a provocar las cesantías y prescindibilidades enunciadas formaron parte de un proyecto sociopolítico que provocó la destrucción de más de un 50 por ciento del aparato productivo nacional ocasionando con ello más de un millón y medio de desocupados y la pérdida del valor real del salario del orden del 50 por ciento, recayendo sobre la clase trabajadora el peso de la crisis producida como consecuencia de la implementación de tales políticas".

En estas expresiones, que por venir de calificados colegas de la bancada radical quitan cualquier tinte partidista a nuestra presenta-

ción, fundamento el artículo 1º que proponemos en sustitución del contenido en el dictamen. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pugliese). — Como la comisión no ha expresado su propósito de aceptar la modificación propuesta por el señor diputado Manzano, corresponde votar el artículo 1º tal como figura en el dictamen.

Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Lestani. — Señor presidente: en la comisión hemos tenido un debate importante con relación a este proyecto. Tal cual lo ha señalado mi compañero de bancada el señor diputado Manzano hemos procurado la reparación integral de los perjudicados.

Ante la imposibilidad de lograr plenamente ese propósito hemos querido concretarlo en parte y en ese sentido, como integrante de la comisión, propongo una nueva redacción del artículo 1º, que seguramente no servirá para alcanzar el nivel de reparación deseado pero a nuestro entender permitirá ajustarnos un poco más a la verdad.

Propongo la siguiente redacción para el artículo 1º: "Las personas que por motivos políticos o gremiales fueron dejadas cesantes, declaradas prescindibles o forzadas a renunciar a sus cargos públicos o privados, o se vieron obligadas a exiliarse, desde el 24 de marzo de 1976, podrán computar al solo efecto jubilatorio, en los regímenes para trabajadores en relación de dependencia o autónomos, según corresponda, el período de inactividad comprendido entre el momento en que cesaron en sus tareas y el momento de la sanción de esta ley". Como se observará, las modificaciones que propongo se refieren a la fecha de vigencia de la ley 16.001 y asimismo, la que menciona el artículo, es decir, el 9 de diciembre de 1983.

Pese a la buena voluntad que seguramente han tenido muchos entes y el propio gobierno nacional, todavía aquellos hombres que fueron dejados cesantes a partir del 24 de marzo de 1976, como bien señaló un diputado que me precedió en el uso de la palabra, siguen deambulando por los pasillos del Congreso y por una cantidad impresionante de fábricas, que no sólo no los reincorporan sino que siguen despidiendo trabajadores.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿La comisión acepta?

Sr. Leale. — La redacción del despacho de la comisión resulta mucho más amplia que la del texto propuesto por el señor diputado Lestani para el artículo 1º. El texto propuesto por la

comisión incorpora a mucha más gente, pues incluye también a quienes fueron dejados cesantes en gobiernos anteriores, desde el año 1967.

Por lo expuesto, la comisión no acepta la modificación propuesta por el señor diputado Lestani.

Sr. Lestani. — Señor presidente: cuando el señor diputado Leale se refiere a la no aceptación de las modificaciones propuestas por este artículo, espero que se esté refiriendo a la primera parte del artículo y no a la segunda. Sería importante que aceptase la modificación propuesta en la segunda parte del artículo.

Sr. Leale. — Reiteramos que la no aceptación de las modificaciones referidas al artículo 1º comprende a todo el artículo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 1º del dictamen.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 2º.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Manzano. — Señor presidente: después de las consideraciones que he efectuado desisto de seguir proponiendo modificaciones, habida cuenta de que la comisión va a insistir en el despacho original. Sin embargo, cuando se considere el artículo 6º vamos a oponernos a él en forma terminante.

Lo que está en discusión, para ver si podemos sacarlo del contexto previsional, no es una reparación previsional sino dos derechos de rango constitucional: el de la estabilidad del empleo y el de la igualdad ante la ley. Los perjuicios que se busca reparar se produjeron en el contexto de una norma de facto que suspendió una garantía constitucional. Por la ley de prescindibilidad —cuando hicieron uso de ella y no directamente de la coerción— quedaban en suspenso hasta el 31 de diciembre de 1976 la estabilidad del empleado público y la igualdad ante la ley.

Nuestro proyecto apunta a una reparación integral y no creo que ella sea mucho más gravosa para el Estado; quizás en muchos de los juicios que se están tramitando haya acuerdos entre las partes de manera de evitar sentencias onerosas para el Estado. No se trata de que nuestra solución sea más barata o más cara; de lo que sí estamos seguros es de que es más justa.

Voy a terminar mi intento de modificar el despacho de la comisión en el sentido de que el cómputo del lapso de inactividad forzosa sirva para la determinación de todos los beneficios —y no solamente de los jubilatorios— que en

función de antigüedad le acuerden al trabajador sus regímenes estatutarios, escalafonarios y de licencia, los convenios colectivos, el régimen previsional y toda otra norma general o especial, diciendo que por medio de la norma de facto que he citado —leo— “se plasmó la síntesis filosófica que sirvió de ideario a la represión irrestricta y que fue base y punto de partida del absolutismo moderno que sustituyó el estado de derecho en la comunidad nacional.

“Así fue como el funcionario de facto encargado de la gobernación de la provincia de Buenos Aires esbozaba públicamente el pensamiento de la autocracia de facto en estos términos: ‘Acabaremos con los terroristas, con los colaboradores, con los simpatizantes y con los indiferentes’. Esta persecución a ultranza se llevó a cabo dentro de la administración pública, a través de las normas citadas, las que fueron manifestación legislativa de los objetivos de ese estado de excepción que constituyó el nefasto proceso de reorganización nacional.

“Para dar un pequeño margen de razonabilidad a la arbitrariedad que campea por todo el texto, el artículo 3º recomendaba que las cesantías respondieran a la supuesta intención de producir un ‘real y concreto proceso depurativo de la administración pública, sin connotaciones partidistas o sectoriales’.

“La aplicación mostró que el poder que la ley otorgaba se instrumentaría como arma de intimidación y de persecución.

“Se dispuso que si el empleado declarado prescindible tenía una antigüedad en el empleo mayor de seis meses, se hacía acreedor a percibir una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de seis meses.

“Por el artículo 6º se catalogó a quienes no tendrían ni siquiera el derecho a ser indemnizados.

“Como muestra de las ‘garantías’ que imperaban, el inciso 6º del citado artículo permitía cesantar sin indemnización a aquellos que constituyeron un factor real o efectivo de perturbación.

“Finalmente, se dejaba en suspenso hasta el 31 de diciembre de 1976 cualquier norma legal que se opusiera a la ley, entre las cuales quedaba implícitamente incluido el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, consagrado en la Convención Nacional reunida en Santa Fe en 1957.”

Las palabras que he leído corresponden a los fundamentos de un proyecto de ley presentado en esta Cámara por los diputados Jesús Rodríguez y Domingo Romano.

Sr. Gurioli. — Estamos radicalizando los bloques.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Leale. — Señor presidente: vuelvo a insistir en el argumento inicial: este proyecto apunta a una reparación previsional y no integral. Le sugiero al diputado preopinante que presente un proyecto por el que se regulen los aspectos reparadores no incluidos en el que estamos considerando; pero ahora estamos discutiendo una iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo, sobre la que hemos trabajado en comisión para legislar con la sensatez necesaria y no provocar un descalabro económico.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Maya. — Señor presidente: quiero solicitar una modificación.

El artículo dice: “El reconocimiento del período de inactividad deberá solicitarse, dentro de los noventa (90) días de vigencia de esta ley, . . .”.

Creo que resulta injusto fijar un plazo tan breve para ejercer un derecho. Si eliminamos esta expresión —“dentro de los noventa (90) días de vigencia de esta ley”—, el ejercicio de los derechos caerá dentro del campo general de las prescripciones. Esta ley, de acuerdo con su artículo 1º, es un acto de generosidad respecto de quienes no ejercieron sus derechos y debe guardar congruencia en el artículo 2º.

Posibilitar que los derechos de esta ley se ejerzan a la fecha de puesta en vigencia de la ley 16.001 significa abrir nuevamente la puerta para el ejercicio de derechos, dejando sin efecto prescripciones, ya que todo este accionar se puso en práctica a partir del gobierno constitucional de 1973. Quienes no ejercieron sus derechos entre 1973 y 1976 —estando hoy prescriptos—, tendrán una puerta abierta nuevamente con esta ley; y decimos que no sólo es para los que no ejercieron esos derechos entre 1973 y 1976, sino que va mucho más allá de la puesta en vigencia de la ley 16.001. Ahora, por este artículo 2º, obligamos a que las víctimas de la dictadura ejerzan sus derechos en 90 días.

Estas son las razones por las que solicito que se elimine el plazo de 90 días y se dejen los plazos normales de prescripción.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Leale. — La comisión insiste en el plazo de 90 días dado que se va a realizar toda la publicidad necesaria.

Asimismo, las personas que ya no han usufructuado de estos derechos son muy pocas. Incluso,

creemos que están a la espera y a la expectativa de un proyecto de esta índole.

Sr. Maya. — Ya que la comisión no acepta el plazo de prescripción normal, propongo concretamente que sea de un año, por si no es efectiva la publicidad.

Sr. Leale. — La comisión acepta el plazo de un año. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 2º con la modificación propuesta por el señor diputado por Entre Ríos.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 3º.

Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. García (C. E.). — Señor presidente: quiero proponer una nueva redacción para el artículo 3º teniendo en cuenta la finalidad de esta ley y los antecedentes.

Sugiero la siguiente redacción: "Quienes soliciten el reconocimiento de períodos de inactividad deberán acreditar actividad política o gremial al momento de la cesación en el servicio". Creo que ésta es la terminología adecuada.

Para estar acogidos a este régimen es más que suficiente con la acreditación de la actividad política o gremial. Por eso pido a la comisión que admita mi sugerencia y en vez de requerir que se acredite fehacientemente la causa política o gremial —lo que llevaría a considerar que el empleado fue culpable— se establezca una especie de inversión de la prueba.

La acreditación a que aludo podrá hacerse por vía de testimonio —que es lo fundamental— o mediante una constancia del partido político o del gremio en que revistaba el agente; con tal antecedente quedaría comprendido en este régimen.

Solicito a la comisión que contemple mi propuesta pues entiendo que bajo el aspecto jurídico y político no debemos ser excesivamente exigentes para con quienes tuvieron que afrontar durante años diferentes penurias económicas, soportando una verdadera espada de Damocles sobre su cabeza.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Leale. — La comisión acepta que la conjunción "o" quede sustituida por la expresión "y/o" entre los términos "política" y "gremial".

Sr. García (C. E.). — Entiendo que la modificación que propuse se corresponde con el espíritu que persigue la norma.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia advierte al señor diputado por Santiago del Estero

que la comisión no ha aceptado su propuesta, aunque ha introducido una modificación al artículo 3º del despacho.

Sr. García (C. E.). — La soberbia es la peor consejera.

Sr. Presidente (Pugliese). — No sé si se trata de eso. Simplemente le informo lo que ha resuelto la comisión.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Alagia. — Los sujetos beneficiados por el proyecto en consideración son quienes aduzcan motivos políticos o gremiales o hayan sido declarados prescindibles. En ello no hay ninguna duda. El artículo 3º establece la forma de probarlo. Generalmente el motivo estará manifestado en una prescindibilidad.

Pero el artículo 3º omite la demostración de la prueba —tornándola así un tanto diabólica— en el caso en que se aduzca exilio o que el agente haya sido forzado a renunciar. En este último supuesto, al provocarse la renuncia —es útil detenernos aquí porque existe todo un acto jurídico con apariencia de legalidad—, en realidad lo que pasa es que hay motivos subjetivos que han obligado al agente a renunciar.

Por lo tanto, propongo que se agreguen como párrafos segundo y tercero los siguientes: "Los que aduzcan razones de exilio, mediante la prueba de los o el domicilio o residencia", y "Los que manifiesten motivaciones involuntarias como causal de renuncia, mediante declaración jurada a sus efectos".

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Leale. — La comisión no acepta esa modificación, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Lestani. — Señor presidente: voy a proponer la sustitución del segundo párrafo de este artículo por otro, teniendo en cuenta que es muy difícil acreditar fehacientemente los despidos en todos los casos.

De manera que propongo como segundo párrafo de dicho artículo el que figura en el proyecto alternativo presentado por mis compañeros de bancada y que dice lo siguiente: "Se presumirá de pleno derecho la existencia de esa causa cuando la cesación haya sido impuesta sin haberse incoado sumario previo, ni dictado sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada o el exiliado haya poseído una militancia política o gremial notoria o su salida del país haya sido dispuesta mediante un acto de quienes usurpaban el gobierno".

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Leale. — Señor presidente: la comisión ha estudiado exhaustivamente este proyecto durante extensas reuniones. Considero que no debe modificarse su redacción.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Belarrinaga. — Señor presidente: en virtud de la disimilitud de opiniones que ha originado este proyecto y de la decisión unilateral del presidente de la comisión de no aceptar ninguna modificación sin siquiera dar vuelta la cabeza para consultar a sus demás integrantes, hago moción de que vuelva el asunto a comisión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar la moción de vuelta a comisión formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

— Resulta negativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el artículo 3º.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 4º.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración el artículo 5º.

Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. García (C. E.). — Señor presidente: el artículo 5º establece que se formularán cargos por los aportes previsionales a los favorecidos por esta norma. Entiendo que este no es el espíritu de la iniciativa que consideramos, porque de esta manera se está imponiendo una doble sanción a quienes estuvieron inactivos durante tanto tiempo. Creo que este artículo debe ser excluido del proyecto, porque en otros casos referidos a reparaciones no se hizo pagar cargo previsional alguno a quienes fueron favorecidos con la reincorporación.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Leale. — El artículo dice: "... de cargos por aportes, los cuales, a elección del interesado, podrán ser deducidos de los haberes a los cuales se tenga derecho". Evidentemente esto no crea inconveniente alguno al beneficiario, pues abona la deuda con la caja de jubilaciones el día que percibe el dinero. En consecuencia, estimo que el artículo debe ser aprobado tal como está redactado.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Stolkner. — Señor presidente: complementando lo manifestado por el señor miembro informante de la comisión, debo señalar que en varias oportunidades se ha dicho que se está tratando una ley previsional; pero hay que tener en cuenta que si no se incorporaran a los fondos de las respectivas cajas los aportes que corresponden al tiempo de antigüedad que se reconoce en reparación de la injusticia de las cesantías sin causa, no se establecería una reparación sino una ratificación en desmedro de la economía de las cajas de previsión. Por este motivo es que sostengo que debe aprobarse el despacho de la comisión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Lestani. — Señor presidente: si en alguna medida puedo salvar la responsabilidad de los integrantes del bloque justicialista, quiero decir a la Honorable Cámara que en la comisión hemos solicitado que se excluya el artículo en cuestión. Quienes puedan acogerse a los beneficios de la jubilación en virtud de los años de servicio adicionales que puedan computar verán reducidos aún más sus magros ingresos si tienen que pagar las deudas que de ninguna manera quisieron contraer y que se originaron a causa de una renuncia forzosa o un despido injustificado.

De esta forma pretendo deslindar la responsabilidad que podría cabernos a los integrantes del bloque justicialista que formamos parte de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Maya. — Coincido con lo expresado por mi compañero de bancada en solicitar la eliminación del artículo 5º, ya que imponer el pago de los aportes altera el espíritu de la ley, que esencialmente es reparador.

A partir del artículo 1º se ponen de manifiesto una serie de antecedentes que conducen irremediablemente a concluir que nos encontramos ante un acto de injusticia.

Normalmente en derecho, cuando una persona se encuentra ante un hecho valorado como injusto, se impone la reparación del daño causado. Esta reparación abarca dos aspectos fundamentales: uno material y otro espiritual. Creemos que, en cuanto al plano espiritual, con el ejercicio de la democracia y la recuperación de la vida institucional todos los argentinos estamos reparados; y la reparación será mayor en la medida en que podamos consolidar definitivamente estos logros.

Entonces, la cuestión se traslada al plano material, en el que la reparación puede ser integral o parcial. Es integral cuando abarca todos los aspectos posibles. Más allá de las discrepancias, aquí se ha dicho que eso no es posible debido a la realidad económica y administrativa.

Entonces, nos ubicamos en una reparación parcial que podemos circunscribir dentro del campo previsional; pero cuando consideramos la puesta en práctica de esta reparación previsional, imponemos los aportes. En consecuencia, me pregunto cuál es la reparación que hacemos en definitiva. En lugar de canalizar esta cuestión por la alternativa de acreditar años de servicio mediante el pago correspondiente por vía de una moratoria, decimos que se trata de una reparación de lujo porque tiene un calificativo político.

Creo que la reparación plena en el campo previsional tendría un paralelismo en esta ley si suprimiéramos el artículo 5º.

Además todo esto guarda relación con los antecedentes legislativos en la materia. Más allá de sus colores políticos, cada vez que termina con períodos de facto la civilidad se ha caracterizado por su generosidad y solidaridad. En este caso esos actos de solidaridad tienen el antecedente más reciente en una ley del gobierno constitucional que ejerció el poder entre 1973 y 1976. Por ella se liberó de todo tipo de aportes a quienes no sólo se les dio una reparación espiritual sino también material.

En consecuencia, solicitamos la eliminación del artículo 5º.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Leale. — Señor presidente: el espíritu de reparación que guía este proyecto se concreta al permitir al beneficiario el acceso al goce de la jubilación. Sin este artículo y sin esta ley, ello sería imposible.

Por otro lado, la jubilación sin aportes sería equivalente a una pensión graciable. Para que exista la jubilación también deben estar presentes los aportes correspondientes. Sin embargo, vuelvo a repetir que al beneficiario se le otorgan todas las facilidades necesarias para que pueda cumplir acabadamente con lo que dispone esta iniciativa, ya que los aportes se descontarán de los haberes a percibir. Por tal motivo, la comisión no acepta la propuesta formulada.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Fappiano. — Se ha dicho que esta ley responde a una finalidad reparatoria de las injusticias provocadas por las cesantías producidas

por los gobiernos de facto. Es decir que reposa en un principio de solidaridad del derecho.

Si ello es así, no advierto cómo se compatibiliza este principio que inspira a la norma con la formulación de cargos por aportes. El cargo corresponde que se efectúe por quien ha dejado de aportar voluntariamente cuando tenía la obligación de hacerlo. En consecuencia, aquí tiene que existir una determinación del aporte y no la formulación de un cargo, porque el cesante no tenía ninguna obligación de realizar el pago jubilatorio en término.

Además, si queremos dar a este dispositivo un mayor sentido de justicia, la determinación del aporte debería manifestarse mediante un porcentaje que no supere el 30 por ciento del total determinado. En consecuencia, propongo la eliminación de la expresión "cargo", que figura en el segundo párrafo del artículo 5º, y que la determinación del aporte se efectúe en función de un porcentaje del 30 por ciento como máximo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. García (C. E.). — Señor presidente: ante las palabras del presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social acerca de lo que es la contribución y sobre lo que es la jubilación, le pido que se fije en la última parte del artículo 5º, que expresa: "Las cajas nacionales de previsión tomarán a su cargo las contribuciones patronales correspondientes a la antigüedad reconocida". Es decir que a la patronal que despidió sin causa se la exime de pagar y al obrero que fue dejado sin trabajo se le efectúa un cargo. Esta sola antinomia nos muestra que este artículo no se ha leído con detenimiento o no se lo ha redactado correctamente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Maya. — He solicitado la palabra para retirar la proposición que formulé.

A fin de flexibilizar la situación y lograr un resultado más positivo para las personas destinatarias de esta ley adhiero al planteo realizado por el señor diputado Fappiano, no sin antes expresar que considero acertado lo manifestado por el señor diputado García.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Pérez. — La comisión no acepta las modificaciones propuestas, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cortese. — Señor presidente: creo que debemos buscar la razón legal de la determinación de esta norma. Está claro que los aportes patronales quedan a cargo de las cajas nacionales

de previsión puesto que la prestación del servicio laboral no se ha efectivizado y sería imposible imponer el aporte patronal.

Los cargos correspondientes a los aportes de los beneficiarios podrán deducirse de las prestaciones jubilatorias que se perciban. La razón legal reside en un sistema previsional que no logra autofinanciarse en la Argentina.

Hoy hemos aprobado el presupuesto de la Nación y, dentro de él, una partida específica para atender la diferencia entre ingresos y egresos de las cajas nacionales de previsión.

Una moratoria en la Argentina de hoy no ha resultado todo lo productiva que se esperaba, haya sido para los autónomos o para las obligaciones pendientes a cargo de la parte patronal. De tal manera que cada vez que corresponda tratar un tema similar, quizás sin realizar plena justicia tengamos que insistir en este temperamento como medida que contribuya a ampliar la base cuantitativa de las prestaciones previsionales en la Argentina.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Corzo. — Señor presidente: con respecto al proyecto que estamos tratando quisiera llamar a la reflexión al señor presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

Hace muy pocos días estuvimos considerando en el seno de la comisión un proyecto similar al que nos ocupa y que tiene que ver con los trabajadores que han cumplido 70 años de edad y adeudan aportes previsionales a las cajas. Dicho proyecto establece que en caso de hacerse efectivos los aportes el trabajador no debe concurrir más allá del 30 por ciento de sus haberes jubilatorios.

Sin ánimo de proponer que el proyecto vuelva a comisión, porque considero que ya ha sido suficientemente debatido, considero que la sugerencia del señor diputado Fappiano se ajusta a la realidad, encara este problema que evidentemente tiene profundas connotaciones sociales y acerca las soluciones que las circunstancias están aconsejando.

Sr. Presidente (Pugliese). — La comisión no ha aceptado las modificaciones.

Se va a votar el artículo 5º del dictamen.

— Resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 6º y 7º.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Nieva. — Señor presidente: deseo proponer un nuevo artículo.

Aquí se ha hablado de una reparación integral y no parcial para quienes han sido víctimas de los atropellos del régimen militar. Pero esa gente a la que se refiere el artículo 1º del proyecto no sólo se desempeñó en la administración pública nacional sino también en la provincial y en la municipal. De manera que si queremos realmente efectuar una reparación histórica integral, moral, ética, política y legal, es necesario incorporar un artículo que así lo determine expresamente.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Me permite una aclaración, señor diputado?

Sr. Nieva. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pugliese). — El artículo 1º del proyecto habla de cargos públicos. No dice "nacionales".

Sr. Nieva. — Sin embargo, interpreto que la norma sólo comprende a los empleados de la administración pública nacional.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Por qué elige la interpretación peor?

Sr. Nieva. — Entiendo que es así y por eso propongo agregar un artículo 8º que diría: "El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de provincia a adherir a la presente ley en los casos comprendidos en el artículo 1º y en jurisdicción de las provincias".

De esta manera, la reparación abarcaría también a tantos empleados de administraciones provinciales y municipales que fueron dejados cesantes por los gobiernos de facto, cuando mediar la adhesión de los gobiernos provinciales a esta ley.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Acepta la comisión el artículo propuesto por el diputado Nieva?

Sr. Leale. — Sí, señor presidente.

A la vez, deseo aclarar que el régimen instituido por este proyecto abarca no sólo a trabajadores en relación de dependencia sino también a trabajadores autónomos.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Maya. — Señor presidente: creo que quien ha planteado más claramente las cosas ha sido el señor diputado Nieva porque este proyecto de ley es de aplicación en la administración nacional, y la demostración de que esto es así la da la parte final del artículo 5º cuando dice que: "Las Cajas Nacionales de Previsión tomarán a su cargo...", o sea que bajo ningún punto de vista prevé la esfera provincial.

Por otra parte, mal podríamos establecer una legislación que tenga imperio en el ámbito provincial en esta materia sin avasallar el régimen federal. En consecuencia, lo que corresponde es invitar a los gobiernos provinciales que no han

encarado este problema a que adhieran al presente régimen de reparaciones. Por lo tanto, aceptamos la propuesta del señor diputado Nieva.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Bulacio. — Señor presidente: creía que el artículo 1º expresaba con claridad que el proyecto de ley comprendía a todos los trabajadores. Me parece que la propuesta del señor diputado Nieva limita los alcances de la norma porque invita a las provincias a adherir. ¿Y las que no adhieran?

Sr. Presidente (Pugliese). — Daría la impresión de que la mayoría de los legisladores creen que no podemos obligar a las provincias.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini. — Señor presidente: ésta no va a ser una ley convenio. Si el proyecto está estructurado sobre la base de las cajas nacionales y de un sistema que se aplica exclusivamente a los trabajadores del orden nacional y la intención es que el efecto se difunda a las provincias, no hay adhesión posible. Hay que dictar un régimen semejante o fundado en similares principios en cada una de las jurisdicciones, porque incluso las cajas son diferentes.

Entonces, en todo caso lo que hay que hacer es invitar a las provincias a dictar regímenes fundados en principios similares a los que inspiran este proyecto, pero no a adherir a esta ley porque ésta no es una ley convenio de la Nación con las provincias.

Sr. Presidente (Pugliese). — Eso parece razonable. En consecuencia el Poder Ejecutivo invitaría a las provincias a dictar leyes con idéntico objetivo.

Sr. Nieva. — Estamos totalmente de acuerdo.

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿La comisión acepta?

Sr. Leale. — La comisión acepta la proposición del señor diputado Nieva, dándole la forma jurídica manifestada por el señor diputado Baglini.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar el texto propuesto como artículo 8º, con las modificaciones sugeridas por el señor diputado Baglini, en el sentido de que el Poder Ejecutivo invite a las provincias a dictar regímenes fundados en principios similares a los que inspiran la presente ley.

—Resulta afirmativa.

—El artículo 8º del dictamen (ahora artículo 9º) es de forma.

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda sancionado el proyecto de ley.

Se comunicará al Honorable Senado.

Sr. Cornaglia. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia. — Señor presidente: he pedido la palabra para solicitar el agregado de un artículo más a este régimen, cuyo texto es el resultado de una serie de consultas practicadas que van a ayudar a una interpretación más pulida, sobre todo teniendo en cuenta algunas de las apreciaciones del señor diputado Lestani.

La cuestión es la siguiente: los aportes que se deberán practicar a los beneficiarios no tendrían que ser retenidos de la totalidad del beneficio que van a percibir mensualmente. Ha existido en el derecho previsional argentino copiosa legislación al respecto y antecedentes que justifican que esos cargos no pueden exceder el 20 por ciento de la suma a percibir.

Este criterio ha sido recogido por alguno de los miembros de la comisión; consultado su presidente se sugiere la posibilidad de agregar como artículo 9º el siguiente: "La retención de los cargos a que se refiere el artículo 5º no podrá ser superior al 20 por ciento de las sumas a percibir mensualmente por los beneficiarios". De esta forma determinamos una facilidad más en la cuestión planteada y una mayor amplitud en el criterio de protección que esta ley contempla.

Sr. Presidente (Pugliese). — Como la Presidencia no estaba informada de que se propondría este nuevo artículo, resulta necesario someter a la Honorable Cámara si se reconsidera el proyecto sancionado, para lo cual se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración la propuesta del señor diputado Cornaglia, que consiste en agregar como artículo 9º el texto al que ha dado lectura.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Maya. — Señor presidente: de prosperar el texto propuesto por el señor diputado Cornaglia, a mi entender, dentro de un ordenamiento adecuado, tendría que estar a continuación del artículo 5º o al final de éste.

Pero deseo solicitar una aclaración a la comisión. Aquí no se ha hecho reducción del monto a pagar; lo que se hace es limitar al 20 por ciento de lo que perciba mensualmente el beneficiario el importe de la retención. Pero el tema

a determinar es el sistema de actualización del saldo, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con que esto se va a abonar con el sistema tradicional de actualización durante una eternidad. Y diría que es peor el remedio...

Sr. Presidente (Pugliese). — ¿Usted no cree en la estabilidad?

Sr. Maya. — Mientras las cosas sigan así...

Quisiera que se me aclarara la cuestión o que estableciéramos que estos montos no estarán sujetos a actualización y podrán ser descontados de una cantidad que no exceda el veinte por ciento del total del haber jubilatorio.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Lestani. — Señor presidente: yo quisiera que el señor diputado Cornaglia, que incluso me ha mencionado, repitiera su propuesta; luego voy a contestar y a exponer mi punto de vista.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia. — El artículo 9º propuesto dice: "La retención de los cargos a que se refiere el artículo 5º no podrá ser superior al veinte por ciento de las sumas a percibir mensualmente por los beneficiarios".

Esto recoge algunas de las inquietudes planteadas por el señor diputado Lestani y otras provenientes de nuestra propia bancada en el sentido de asegurar una mejor protección a los beneficiarios de esta ley.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Lestani. — Creo que en su momento se me debe haber malinterpretado. Decía que el importe que recibe el jubilado es demasiado escaso. Si vamos a descontarle otra vez el veinte por ciento de su ingreso, creo que es muy poco lo que le quedará. Por esta razón habíamos propuesto en principio en la comisión el no pago por parte del futuro beneficiario, pero ante la necesidad de que se aprobase este proyecto, aceptamos que pagara hasta el veinte por ciento del importe que le hubiera correspondido hacer como aporte, y no hasta el veinte por ciento de la suma que recibía.

Una vez más apelo a la sensibilidad del miembro informante y de los integrantes de la Comisión de Previsión y Seguridad Social a los efectos de que se disponga en este artículo que el importe a pagar por el futuro jubilado no exceda del veinte por ciento de lo que le hubiera correspondido o le corresponda pagar en concepto de aportes.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Cornaglia. — Señor presidente: hemos tratado de plasmar una norma que beneficie a los que reciban estas jubilaciones al disponer que los cargos no se produzcan con retenciones totales sobre las primeras prestaciones que cobren los beneficiarios. A partir de este principio, recogiendo experiencias del régimen laboral y previsional en cuanto al monto máximo de retenciones posibles y lo que la propia jurisprudencia ha admitido con respecto a la embargabilidad de las remuneraciones, hemos aceptado este tope del veinte por ciento. Esta circunstancia crea un beneficio considerable en la aplicación del sistema y hace coherente el planteo del proyecto, que habilita incluso a la percepción en forma casi automática una vez solicitado el beneficio.

Pero aquí nos enfrentamos nuevamente con dos criterios. El proyecto del Poder Ejecutivo —como lo expresara claramente el señor diputado Cortese— responde a las ideas básicas de una previsión que se basta a sí misma, incluso en épocas de crisis. En esta circunstancia especial, por un hecho específico, la subsistencia del jubilado, admitimos este beneficio de percepción limitada, y lo hacemos dentro de los parámetros normales de protección de la remuneración obrera y de los beneficiarios de jubilaciones.

Además, esta circunstancia corresponde, en la proporción respectiva, a todos los haberes jubilatorios: los bajos y los altos. Proporcionalmente tendrán esta retención en la forma prevista.

La fundamentación la encontramos en el criterio de que aquí habilitamos para entrar en el sistema previsional a quienes se han visto marginados del mismo por una situación de irregularidad, producto de la legislación de facto dictada. Esta interpretación —que es la que nos guiara— está enmarcada en el proyecto del Poder Ejecutivo y corresponde a un análisis que se hizo durante largos meses en la comisión respectiva; incluso existen antecedentes de normas similares que hasta tuvieron veto presidencial.

Nosotros podemos pensar en adjudicar beneficios de este tipo pero debemos tener en cuenta la real situación de las cajas. Esto es lo que efectivamente, a través de cálculos actuariales y consultas practicadas en los niveles respectivos, se pudo conseguir dentro de este sistema. Aquí se habilita con justicia a un reparto real en cuanto a lo que las cajas tienen y no sobre la base de lo que no pueden dar. Es un buen

proyecto de ley teniendo en cuenta las reales circunstancias existentes. Por eso mantenemos la redacción del artículo 9º.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Curátolo. — Señor presidente: en el plan de estabilización monetaria —por algún imponderable— podrían producirse —pese a la intención y voluntad del gobierno y pueblo argentinos— algunos desfasajes que perjudiquen a los beneficiarios de este proyecto en consideración.

Por esa razón, propongo el siguiente agregado en el artículo 9º: "Los saldos de cargos por aportes mencionados serán ajustados en porcentajes que no podrán superar los incrementos de los haberes jubilatorios percibidos".

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Corzo. — Señor presidente: creo que en la exposición del señor diputado Cornaglia se advierte la inquietud por solucionar un problema social que se crea con esta situación.

Pero acá está faltando una parte de la solución, porque esto puede generar la situación de que mientras viva el jubilado deba pagar esos aportes. Los diputados de la bancada justicialista plantean resolver el problema del pago de los cargos por aporte; y en ese caso concreto, considerando la difícil situación por la que están atravesando las cajas que integran el sistema de previsión, propongo que los mismos no superen el 50 por ciento de los importes que en rigor deberían abonar.

Sr. Leale. — La comisión insiste en la redacción del artículo 9º que leyera el señor diputado Cornaglia y no admite modificación de ninguna otra índole.

Sr. Presidente (Pugliese). — Lo que se ha aceptado como artículo 9º es que la retención por cargos a que se refiere el artículo 5º del proyecto sancionado no podrá ser superior al 20 por ciento de las sumas a percibir mensualmente por los beneficiarios.

Se va a votar el nuevo artículo propuesto por el señor diputado Cornaglia en nombre de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — El texto que acaba de aprobarse queda incorporado como artículo 9º de la sanción producida por la Honorable Cámara ¹.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 4271.)

14

LEY ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
MODIFICACION

(Orden del Día Nº 1112)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Asuntos Municipales y de los Territorios Nacionales, ha considerado los proyectos de ley de los señores diputados Pupillo y Bernasconi, sobre modificación a la ley de facto 19.987, orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y sus modificaciones; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícase la ley de facto 19.987 y sus modificatorias, en la forma que a continuación se indica:

1. Incorpórase como inciso r) del artículo 9º, el siguiente:

Inciso r): comunicar todo programa y proyecto de interés zonal al consejo vecinal que corresponda.

2. Sustitúyese el último párrafo del artículo 18 por el siguiente:

Los cargos de concejal y consejero vecinal son incompatibles con la función judicial o el desempeño de otra función, tarea o puesto electivo, ejecutivo o empleo remunerado por el Estado nacional, provincial, o por los municipios, excepto la docencia.

3. Sustitúyese el artículo 20 por el siguiente:

Artículo 20. — Ningún concejal o consejero vecinal, desde el día de su elección y hasta el cese de sus funciones, podrá ser detenido sin orden expresa del juez competente, salvo en el caso de flagrante delito, ni molestado o reconvenido por autoridad alguna por motivo proveniente del ejercicio de sus funciones, o en razón de las opiniones que sustenten.

4. Sustitúyese el artículo 21, por el siguiente:

Artículo 21. — Cuando se siga una causa criminal contra un concejal o consejero vecinal, previo examen sumario del mérito de aquélla por el cuerpo, éste, con los dos tercios de los presentes podrá suspender en sus funciones al acusado.

5. Incorpórase como inciso z) ter del artículo 31, el siguiente:

Inciso z) ter: comunicar todo proyecto y programa de interés zonal al consejo vecinal que corresponda.